

Irán y sus crisis superpuestas

Ignacio Álvarez-Ossorio

Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid



Irán celebró el pasado mes de febrero el 41º aniversario de la Revolución Islámica en un ambiente de extrema tensión resultado de la crisis económica que atraviesa el país y de la erosión de legitimidad del régimen de los ayatolás. El año 2020 empezó con fuertes sacudidas, ya que al asesinato del Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza al-Quds de la Guardia Revolucionaria, el 3 de enero fue respondido con el derribo por error de un avión ucraniano, lo que provocó la muerte de sus 176 tripulantes, la mayor parte de ellos iraníes.

El régimen iraní se enfrenta a una serie de crisis superpuestas que le han colocado en una situación extremadamente delicada y que, de prolongarse en el tiempo, podrían desencadenar una tormenta perfecta

En la actualidad, el régimen iraní se enfrenta a una serie de crisis superpuestas que le han colocado en una situación extremadamente delicada y que, de prolongarse en el tiempo, podrían desencadenar una tormenta perfecta. A la aguda crisis económica, deben añadirse el restablecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, la intensificación de las movilizaciones populares, la caída en picado del precio del crudo y, más recientemente, la extensión del coronavirus COVID-19 por su territorio. La avanzada edad del guía supremo Ali Jamenei, de 80 años, sin un candidato claro a la sucesión supone un elemento más de incertidumbre en el corto plazo.

La política de ‘máxima presión’ de Trump

El 8 de mayo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de EEUU del acuerdo nuclear de 2015 y la puesta en marcha de una política de ‘máxima presión’ sobre Irán. Trump justificó su decisión señalando: “El acuerdo descansaba en una gigantesca ficción: que un régimen asesino sólo deseaba un programa nuclear pacífico. Si no hacíamos nada, el mayor patrocinador mundial del terrorismo iba a obtener en poco tiempo la más peligrosa de las armas”.

El pacto nuclear de 2015, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés (Joint Comprehensive Plan of Action), fue el resultado de tres años de intensas conversaciones entre Irán y el G5+1 (los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) y preveía que Irán detuviese su programa nuclear a cambio del progresivo levantamiento de las sanciones internacionales. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se responsabilizaría de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Irán, que abriría sus centrales a los inspectores internacionales.

Durante su campaña presidencial, Trump calificó dicho acuerdo como “el peor posible” al considerar que había reforzado a Irán y le había permitido extender su influencia regional. Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, el nuevo presidente elevó el tono de sus amenazas contra el régimen iraní. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2017, acusó a Irán de ser “una dictadura corrupta” y “un régimen asesino” que extendía “la muerte y la destrucción” por Oriente Medio. De ahí que a nadie le sorprendiera el anuncio de la retirada definitiva de EEUU del acuerdo nuclear, tras lo cual Trump volvió a denunciar que “si no se hace nada, el mayor patrocinador mundial del terrorismo va a obtener en poco tiempo la más peligrosa de las armas”.

El 7 de agosto de 2018, el presidente Trump anunció una primera ronda de sanciones encaminada a asfixiar económicamente al régimen iraní. Entre las medidas adoptadas figuraba la prohibición del comercio de oro, metales preciosos y materiales como el aluminio y el acero, así como la venta de automóviles, alfombras y alimentos iraníes. Además, EEUU amenazó con sancionar a las empresas extranjeras con intereses en el país persa. El 4 de noviembre entró en vigor una segunda ronda de sanciones que afectaba a las transacciones financieras con el Banco Central de Irán y la compra de petróleo, la principal fuente de divisas del país, así como medidas contra las principales navieras, empresas y bancos iraníes.

En su primer discurso como Secretario de Estado, Mike Pompeo dejó claro que Irán representaba la principal amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio. El 21 de mayo de 2018 señaló en el *think tank* conservador The Heritage Foundation: “Irán no tendrá nunca más carta blanca para dominar Oriente Medio [...]. Perseguiremos a los agentes iraníes y sus apoderados de Hezbolá en todo el mundo y los aplastaremos”. En la mencionada intervención, Pompeo estableció las doce condiciones que Irán debería cumplir para que EEUU levantara sus sanciones. En primer lugar, el régimen iraní debería proporcionar un listado completo al OIEA de las dimensiones militares de su programa nuclear y abandonar dicho programa para siempre. En segundo lugar, Irán debería cerrar su reactor de agua pesada además de acabar con el enriquecimiento de uranio. En tercer lugar, Irán debería permitir el libre acceso e incondicional a la OIEA a todas sus instalaciones nucleares. En cuarto lugar, Irán debería acabar con la proliferación de misiles balísticos, así como con el lanzamiento y desarrollo de misiles con capacidad nuclear. En quinto lugar, Irán debería liberar a todos los ciudadanos estadounidenses, así como a ciudadanos de sus socios y aliados, detenidos bajo cargos falsos. En sexto lugar, Irán debería limitar su apoyo a “grupos terroristas” en Oriente Medio, incluidos Hezbolá, Hamas y Yihad Islámica. En séptimo lugar, Irán debería respetar la soberanía del gobierno iraquí y permitir el desarme y desmovilización de las milicias chiíes en Iraq. En octavo lugar, Irán debería retirar su respaldo a las milicias hutíes y apoyar un acuerdo político pacífico en Yemen. En noveno lugar, Irán debería retirar todas sus fuerzas de Siria. En décimo lugar, Irán debería dejar de apoyar al movimiento talibán en Afganistán. En undécimo lugar, Irán debería poner fin al apoyo de la Fuerza al-Quds de la Guardia Revolucionaria a los “grupos terroristas” regionales. En décimo segundo lugar, Irán debería cesar sus amenazas de destruir Israel, lanzar misiles a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos e interrumpir la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán ha sido el actor más beneficiado por las turbulencias que vivía la región desde el fracaso de la Primavera Árabe con la consiguiente descomposición territorial de Siria, Irak y Yemen, la irrupción del Estado Islámico y la intensificación del sectarismo

Estas exigencias dejaban claro que el objetivo no era sólo renegociar el acuerdo nuclear, sino también obligar a Irán a renunciar a su influencia en Oriente Medio a través de sus *proxies* o aliados regionales. Esta política de ‘máxima presión’ era defendida por los halcones de la administración norteamericana: John Bolton y Mike Pompeo, respectivamente responsables del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Ambos defendían una política exterior intervencionista para reforzar la posición de EEUU a nivel global. También eran estrechos aliados de Israel y Arabia Saudí, que consideraban que Irán representaba una amenaza para la estabilidad regional puesto que ha sido el actor más beneficiado por las turbulencias que vivía la región desde el fracaso de la Primavera Árabe con la consiguiente descomposición territorial de Siria, Irak y Yemen, la irrupción del Estado Islámico y la intensificación del sectarismo.

La respuesta a estas draconianas sanciones no tardó en llegar, ya que el régimen iraní reanudó su programa de enriquecimiento de uranio. El 8 de mayo de 2019, un año después de que EEUU anunciase su retirada del acuerdo, el presidente iraní Hasan Rohani anunció la suspensión parcial del acuerdo y la reanudación parcial del enriquecimiento de uranio. Eso sí, dejando claro que “Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino el de la diplomacia”. El 20 de junio se asistió a nueva vuelta de tuerca en las relaciones bilaterales cuando la Guardia Republicana derribó un dron norteamericano en el estrecho de Ormuz, tras lo cual el presidente Trump ordenó bombardear varias posiciones militares en Irán, aunque finalmente dio marcha atrás ante las posibles represalias que podría adoptar Teherán. Tras varios meses de relativa calma, las tensiones entre EEUU e Irán alcanzaron su punto álgido con el asesinato del comandante Qasem Soleimani, uno de los hombres fuertes del régimen iraní, el 3 de enero de 2020 a su llegada a Bagdad procedente de Damasco. Soleimani era el máximo responsable de las Fuerzas Al-Quds, la unidad de élite en el exterior de la poderosa Guardia Revolucionaria, y, por lo tanto, el cerebro de la expansión iraní por el conjunto de Oriente Medio.

El agravamiento de la crisis económica

El acuerdo nuclear del 14 de julio de 2015 entre el G5+1 e Irán generó un clima de optimismo generalizado, al mismo tiempo que creó unas expectativas de crecimiento desmedidas. El pacto daba, asimismo, un balón de oxígeno a un régimen iraní extraordinariamente debilitado por las sanciones internacionales y por el descenso de los precios del crudo, del que Irán era el quinto productor a nivel mundial. En clave interna, el acuerdo supuso un claro éxito de los sectores reformistas y, en particular, del presidente Hasan Rohani, que en el pasado había

sido responsable de la delegación iraní en las negociaciones sobre el programa nuclear.

Tal y como se preveía, la situación económica mejoró de manera sensible en los siguientes años, aunque no tanto como lo previsto. El ambicioso Plan de Desarrollo iraní para el periodo 2016-2021 contemplaba un crecimiento de la economía de un 8% por año, pero los números fueron bastante más modestos. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2016 la economía creció un 12.3%, aunque el crecimiento se redujo drásticamente en 2017 en que el crecimiento se limitó al 3.7%. El restablecimiento de las sanciones norteamericanas, un elemento clave de la estrategia de 'máxima presión' adoptada por la Casa Blanca, empeoró sustancialmente la situación. A partir de 2018, la economía entró en recesión y se contrajo un 4.8% en 2018 y un 9.5% en 2019.

Quedaba claro que las sanciones no solo buscaban frenar el programa nuclear, sino también estrangular la economía iraní y, por medio de esta vía, debilitar al régimen de los ayatolás. En su discurso del 21 de mayo de 2018 en The Heritage Foundation, el Secretario de Estado Mike Pompeo dejó claro que "el agujijón de las sanciones se volverá aún más doloroso si Irán no cambia de rumbo" y advirtió que "Irán se verá obligado a tomar una decisión: pelear por mantener su economía a flote o seguir desperdiciando sus preciosas riquezas en combates en el extranjero, pero no tendrá recursos para hacer ambas cosas". Las sanciones representaban un ataque contra la línea de flotación de la economía iraní, puesto que no solo afectaron al sector bancario y comercial, sino también al energético. En este sentido debe tenerse en cuenta que la economía iraní depende en gran medida de los hidrocarburos: Irán tiene las segundas reservas de gas más importantes del mundo y las cuartas de petróleo. De hecho, la exportación de petróleo sufrió una drástica reducción pasando de 2,5 millones a principios de 2017 a 250.000 a comienzos de 2020. El hecho de que las exportaciones de hidrocarburos se redujeran en un 90% colocó a la economía iraní a una situación crítica. El real iraní perdió un 60% de su valor frente al dólar y la inflación se disparó al 35% (aunque algunos productos de primera necesidad llegaron a duplicar sus precios). En su discurso a la nación del 31 de diciembre de 2019, el presidente Rohani afirmó que el coste de las sanciones para la economía iraní había sido de más de 200.000 millones de dólares, la mitad de ellos proveniente de los ingresos perdidos por la venta de petróleo y la otra mitad de inversiones que se habían congelado.

Además de disparar la inflación y duplicar el precio de los productos de primera necesidad, la inflación también tuvo un efecto destacado en el aumento del desempleo que pasó del 14.5% en 2018 al 16.8% en 2019. En el último lustro, el porcentaje de población iraní que vive

Ante el agravamiento de la crisis económica, el gobierno iraní decidió presentar un "presupuesto de resistencia" para el 2020, que contemplaba triplicar el precio de la gasolina

bajo el umbral de la pobreza se disparó del 23% al 40%, aunque en algunas provincias como Baluchistan, Sistan, Ilam, Kahgiluyeh y Boyerahmad, golpeadas por la sequía, este porcentaje alcanzó el 65%. Las tasas de desempleo son especialmente elevadas entre los jóvenes, sector en el que rozan el 30%, lo que implica que uno de cada tres jóvenes está desempleado. En este sentido debe recordarse que la población iraní es extremadamente joven y que el 55% de los 83 millones de iraníes tienen menos de 30 años. Como resultado de la crisis económica, cientos de fábricas en el conjunto del país se han visto obligadas a cerrar sus puertas. A su vez, esta situación ha provocado una intensificación de las huelgas, que en el bienio 2017-2018 superaron las 1.200 según The Iran Human Rights Documentation.

Ante el agravamiento de la crisis económica, el gobierno iraní decidió presentar un 'presupuesto de resistencia' para el 2020: "Cuando no hay comida ni agua, todavía estás en peligro, no importa lo fuerte que seas" señaló el presidente Hasan Rohani que afirmó que su país "está pagando un alto precio por desafiar la voluntad de Trump". Este 'presupuesto de resistencia' contemplaba triplicar el precio de gasolina, hasta entonces subvencionada por el Estado, para contener el déficit público, así como reducir los subsidios para alimentos que recibían los sectores más vulnerables. Debe tenerse en cuenta que la gasolina es un monopolio estatal y su precio es fijado directamente por el gobierno. La respuesta por parte de una población iraní al límite de la resistencia no tardó en llegar y el 15 de noviembre de 2019 se desató una ola de movilizaciones sin precedentes que pronto se contagió a más de cien ciudades.

La intensificación de las movilizaciones populares

Desde la entrada en el siglo XXI, Irán ha asistido a una espiral imparable de manifestaciones que denotan la creciente frustración de la población y su malestar con la gestión del gobierno. En 2009 millones de iraníes se echaron a las calles tras la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente en protesta por el supuesto fraude electoral. En 2011, tras el estallido de la Primavera Árabe, cientos de miles de personas volvieron a manifestarse contra el régimen, aunque nuevamente chocaron con el muro de la represión por parte de la Guardia Revolucionaria y los *basiyis*, las fuerzas paramilitares del régimen. En estos dos brotes de descontento, miles de personas fueron detenidas y encarceladas y los líderes de las movilizaciones, algunos de ellos destacados representantes del sector reformista, fueron puestos bajo arresto domiciliario de manera indefinida.

En el último lustro, los brotes de descontento se han intensificado de manera notable. El 28 de diciembre 2017 nuevas movilizaciones irrumpieron en la ciudad de Mashad, la segunda más poblada del país y un importante bastión conservador, y pronto se extendieron a Teherán, Isfahán y Qom, en protesta por la delicada situación económica, pero también contra la corrupción y la ineficiencia del régimen tras varias catástrofes naturales que sacudieron el país como el terremoto en Kermanshah de noviembre y las inundaciones en el Juzestan de diciembre.

Estas protestas también estaban relacionadas con el deterioro de la economía, lo que colocó en una situación extremadamente delicada a los colectivos más vulnerables. De hecho, varios analistas consideran que el levantamiento de Mashad fue instigado, al menos en un primer momento, por los sectores más conservadores que, de esta manera, pretendían dar un toque de atención al gobierno reformista de Rohani. En muy poco tiempo, las protestas de tipo económico adquirieron un tinte político con la petición de la caída del régimen y de sus representantes más notables, lo que provocó una dura represión. Dada la censura existente en el interior del país, no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas ni tampoco la cantidad de detenidos.

La decisión del gobierno iraní del 15 de noviembre de 2019 de triplicar el precio de gasolina para contener el déficit público en el marco de un 'presupuesto de resistencia' aprobado por el gobierno de Rohani desató una nueva oleada de manifestaciones que se contagiaron a más de cien ciudades y que fueron descritas como las más numerosas desde las que provocaron la caída de la dinastía de los Pahleví en 1979. El estallido se dejó notar con más intensidad en las ciudades medianas y pequeñas, así como en el extrarradio de Teherán, zonas donde se concentra la pobreza y que reclaman una mejor redistribución de la riqueza. De hecho, muchos de los manifestantes provenían precisamente de las clases más humildes y más afectadas por las medidas del gobierno. También algunas zonas periféricas como las provincias de Kermanshah o el Kurdistán, que soportan altos índices de desempleo y pobreza, a los que se añaden las recientes sequías e inundaciones que han provocado movimientos de población significativos, se vieron especialmente afectadas por las movilizaciones. En gran medida, "las desigualdades económicas regionales en Irán explican la intensidad y difusión de las protestas, pero los factores desencadenantes directos de las protestas probablemente permanecen vinculados a la dinámica política y de seguridad del país y dentro de cada provincia" (Badawi, 2018).

Las manifestaciones fueron aprovechadas para reclamar la caída del régimen, lo que desató una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, que provocó la muerte de entre 300 y 1.500 personas

Como las ocurridas en otros lugares de la región -Líbano o Iraq, por ejemplo-, las movilizaciones surgieron de manera espontánea sin tener un liderazgo claramente definido. En un primer momento, las manifestaciones fueron pacíficas y se centraron en detener el tráfico en las principales vías del país, pero debido a la brutal represión de la que fueron objeto se radicalizaron y condujeron a la quema de edificios oficiales y al ataque contra bancos y cuarteles. El Ministerio del Interior iraní señaló que los manifestantes provocaron daños en más de 700 sucursales bancarias y en otros 140 edificios gubernamentales.

Las manifestaciones fueron aprovechadas para reclamar la caída del régimen, lo que desató una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, en el curso de la cual se disparó a los manifestantes con munición viva, lo que provocó la muerte de entre 300 y 1.500 personas mientras miles de personas fueron detenidas bajo la acusación de “amenazar la seguridad nacional”. Como suele ser habitual en estos casos, el guía supremo Ali Jamenei culpó a las potencias regionales de estar detrás de los disturbios al señalar en una reunión con los mandos de los *basiyis*: “Nuestros enemigos han gastado una gran cantidad de dinero diseñando esta conspiración y estaban esperando la oportunidad de implementarla mediante la destrucción y los asesinatos. Asumieron que la crisis de la gasolina era la oportunidad deseada que estaban buscando y movilizaron a su ejército. Sin embargo, la nación iraní aplastó el movimiento del enemigo con una magnífica exhibición” (Khamenei, 2019).

Para evitar la difusión de las imágenes de la represión, las autoridades cortaron el acceso a internet en todo el país durante una semana. Las universidades se convirtieron en uno de los epicentros de las movilizaciones en una clara muestra de la pérdida de apoyos del régimen y de su falta de expectativas laborales. No debe pasarse por alto que dos terceras partes de la población han nacido después de la Revolución Islámica de 1979 y han vivido toda su vida bajo las estrictas reglas del sistema islámico. Además de criticar la corrupción y la ineficiencia del régimen para resolver los graves problemas que afronta el país, los manifestantes condenaron la política exterior iraní y su injerencia en las crisis regionales, que se ha traducido en la inversión de miles de millones de dólares para tratar de apuntalar en el poder a sus aliados en Iraq, Siria y Yemen.

A pesar de que el asesinato en Bagdad del general Qasem Soleimani, despedido como un héroe nacional, por parte de EEUU el 3 de enero de 2020 pareció unir de nuevo a la población y se registraron multitudinarias manifestaciones de duelo en el conjunto del territorio, lo cierto es que el derribo del vuelo 752 de las aerolíneas ucranianas, que provocó la muerte de sus 176 pasajeros, la mayor parte iraníes

residentes en el extranjero, desató una nueva ola de malestar contra el régimen, que durante varios días se empeñó en negar su responsabilidad en el ataque.

La intensificación de las movilizaciones es una clara muestra de la creciente frustración popular y, sobre todo, del divorcio existente entre el régimen y la sociedad. En las últimas dos décadas, diversos colectivos han salido a la calle para protestar por la carestía de la vida, la intensificación de la pobreza o el aumento del desempleo, pero también por la ineficiencia del régimen y su corrupción. En sus cuarenta años en el poder, los ayatolás han erradicado cualquier atisbo de oposición y han suprimido los derechos de expresión, asociación y reunión, pero no han conseguido recluir a la población en sus hogares. A pesar de la represión a la que deben hacer frente y el alto precio que se ven obligados a pagar, la población no ha cesado en su empeño de manifestarse cuando lo ha considerado necesario.

El hecho de que las manifestaciones no sólo se den en las grandes urbes constituye un motivo de preocupación para el régimen, que en un futuro cercano tendrá que dedicar cada vez más recursos para intentar acallar las protestas. En este sentido, Peyman Jafari, un investigador de Princeton University, ha advertido: “Mi previsión es que, en los próximos años, la mayor presión social se concentrará en pequeñas ciudades por dos razones. Primero, debido a la sequía, hay un impulso cada vez mayor de las áreas rurales a las pequeñas ciudades circundantes. Esto aumenta el desempleo en estas áreas. Segundo, a diferencia de las grandes ciudades como Teherán, hay menos oportunidades en estas pequeñas ciudades para encontrar trabajo en el sector informal” (Jadaliyya, 2019).

La controvertida gestión del COVID-19

Irán fue el primer país afectado por la pandemia del virus COVID-19 en Oriente Medio y el que sufrió las mayores cifras de mortandad. Los primeros casos se detectaron a mediados de febrero y en poco tiempo se extendió por buena parte del territorio. Según cifras oficiales, a 2 de mayo, había más de 95.646 afectados y 6.091 muertos aunque es bastante probable que el número podría ser mucho más elevado. Se trata del octavo país en número de casos detectados y el noveno en cifras de fallecidos.

La gestión de la crisis por parte del régimen iraní ha sido un ejemplo de improvisación, lo que ha agravado el malestar de la población. En un primer momento, las autoridades infravaloraron la gravedad de la situa-

Rohani señaló en un discurso que que el virus era uno de los complots de los enemigos para difundir el miedo y bloquear el país

ción y se negaron a adoptar medidas contundentes como el confinamiento de la población, tal y como habían hecho las autoridades chinas en la ciudad de Wuhan. A pesar de las crecientes señales de alarma, los iraníes aprovecharon las fiestas del Nowruz, el año nuevo persa, para viajar a sus segundas residencias, lo que contribuyó decisivamente a la expansión del virus por el conjunto del país. Muchos habitantes de Teherán viajaron a la provincia de Gilan a las orillas del Caspio, donde se multiplicó el número de infectados.

A partir del 28 de febrero, el Ministerio de Sanidad decidió tomar medidas más enérgicas y prohibió las oraciones de los viernes en las mezquitas de todo el país y recomendó a la población que permaneciera en sus hogares. El 3 de marzo se anunció que el Estado pensaba liberar a un total de 54.000 presos, muchos de ellos presos políticos, coincidiendo con la celebración del Nowruz y el 24 de marzo se elevó la cifra de los liberados a 85.000 presos. También se decidió el cierre de los centros educativos, la prohibición de los actos públicos o la restricción de los viajes, pero no se llegó a decretar ninguna cuarentena. De hecho, el presidente Rohani advirtió en un discurso el 25 de febrero que el virus podría ser empleado por los enemigos de Irán: “En las escuelas, institutos, universidades y lugares de trabajo, todos deben prestar atención a las recomendaciones de salud, pero todos debemos continuar nuestro trabajo y actividades, porque es uno de los complots de los enemigos para difundir el miedo y bloquear nuestro país”. Un día más tarde volvió a incidir en esta idea al señalar: “No debemos permitir que EEUU añada un nuevo virus al coronavirus deteniendo nuestras actividades sociales a través de un miedo profundo: se trata de una conspiración”.

Un informe de la prestigiosa Sharif University of Technology de Teherán advirtió de que se barajaban tres escenarios de cara al futuro que iban del menos nocivo al más grave. El primero contemplaba un impacto moderado en el caso de que los iraníes siguieran los consejos del gobierno y preveía 120.000 infectados y 12.000 víctimas. El segundo preveía un escenario intermedio en el que habría 300.000 infectados y 110.000 víctimas. En el caso más pesimista, se preveían cuatro millones de infectados y 3 millones y medio de muertos (USIP, 2020).

Ante la gravedad de la situación, el 12 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI para combatir el COVID-19 y demandó a la ONU que se levantasen las sanciones internacionales para poder combatir con mayores garantías la expansión del coronavirus. Aunque la compra de material sanitario no está teóricamente afectada por las sanciones de EEUU, lo cierto es que muchas compañías son reacias a realizar intercambios comerciales con Irán por temor a ser castigadas por Washington.

El 10 de marzo, el periódico conservador iraní *Afkar* advirtió de la posibilidad de que la introducción del COVID-19 en Irán pudiera ser parte de un ataque biológico de EEUU. El 22 de marzo el líder supremo Jamenei rechazó las ofertas de ayuda realizadas por el presidente Trump sembrando dudas sobre sus verdaderas intenciones: “Varias veces los estadounidenses se han ofrecido para ayudarnos a combatir la pandemia [...], pero ¿puede un hombre sabio confiar en usted y aceptar su oferta de ayuda? Podría estar dando medicamentos a Irán que propagan el virus o hacen que permanezca de forma permanente” (USIP, 2020).

El régimen iraní: entre el agotamiento y la resiliencia

Tras cuatro décadas en el poder, el régimen de los ayatolás vive uno de sus momentos más delicados debido a la fuerte presión ejercida por la Administración de Trump, pero también como resultado de la aguda crisis económica que padece el país y su incapacidad para hacerle frente.

La intensificación de las movilizaciones en el curso de las últimas dos décadas evidencia la impopularidad de un régimen que atraviesa sus horas más bajas. No obstante, no debería minusvalorarse su capacidad de resiliencia, ya que, en las últimas cuatro décadas, ha sido capaz de superar situaciones más comprometidas y salir reforzado de ellas, entre ellas la devastadora guerra con Iraq, las tensiones con Arabia Saudí, la hostilidad de Israel, las sanciones de Estados Unidos o el desplome de los precios del petróleo. El régimen iraní ha sido capaz de conservar el poder y mantener, en términos generales, su cohesión interna. Todo ello no quiere decir que no existan disensiones entre las élites gobernantes, no obstante, existe un consenso entre los sectores conservadores y reformistas en torno a la necesidad de garantizar la supervivencia del régimen, en lo que ambos disienten es sobre los medios más adecuados para garantizar su perduración: bien una apertura limitada o bien aferrarse a los principios revolucionarios.

Desde la Revolución Islámica, el sistema político iraní se basa en el ‘gobierno del jurisconsulto’ (*velayat-e faqih*) que otorga al clero chií el control del gobierno. La Constitución iraní de 1979, aprobada tras la Revolución Islámica, concentró el poder en manos del Guía Supremo, labor que fue asumida en primera instancia por el propio Ruhollah Jomeini y, tras su muerte en 1989, por Ali Jamenei, que lleva más de tres décadas en el cargo. No todos los ayatolás comulgaron con este modelo, ya que el influyente Hosein Ali Montazeri, designado en un primer momento como sucesor de Jomeini, consideró que los religio-

sos debían limitar su autoridad al ámbito religioso y que el gobierno debería quedar en manos de tecnócratas, lo que le condenó primero al ostracismo y después al arresto domiciliario.

Hoy en día, el régimen iraní se encuentra dividido entre los sectores reformistas y conservadores que difieren sobre la mejor manera de garantizar la supervivencia del *velayat-e faqih*. Los primeros consideran que es inevitable una apertura controlada hacia el exterior, mientras que los segundos son partidarios de defender hasta el final los principios de la revolución islámica. Debe recordarse que el programa nuclear fue una apuesta personal de los primeros ante la invasión de Iraq, mientras que los segundos apoyaron las negociaciones con el G5+1 como medio para sortear las sanciones. De hecho, el presidente Hasan Rohani consiguió revalidar su mandato en 2017 presentándose como el artífice del acuerdo y prometiendo que ayudaría a aliviar la delicada situación económica. Su ruptura, por lo tanto, ha fortalecido a los sectores conservadores, y también a la poderosa Guardia Revolucionaria, mientras que ha debilitado de manera notable a los reformistas.

La abstención fue la más alta de los últimos cuarenta años, lo que es una muestra más del divorcio que existe entre el régimen y la población

La lucha por la distribución del poder en el seno del régimen se está decantando claramente a favor de los sectores conservadores, tal y como se evidenció en las recientes elecciones parlamentarias del 21 de febrero de 2020 donde consiguieron imponerse de manera abrumadora, entre otras cosas por la inhabilitación de la mayor parte de los candidatos reformistas por el Consejo de Guardianes de la Revolución, que tiene la última palabra a la hora de aprobar las candidaturas y decidió prohibir cerca de la mitad de las 15.000 presentadas, muchas de ellas integradas por los sectores reformistas próximos al presidente Rohani.

Este veto a los sectores reformistas se tradujo en una victoria de los candidatos conservadores, pero a un elevado precio, ya que la abstención fue la más alta de los últimos cuarenta años, lo que es una muestra más del divorcio que existe entre el régimen y la población. A pesar de los esfuerzos realizados por los medios de comunicación y por las propias autoridades, tan sólo un 42,6% de los votantes acudió a las urnas para depositar su voto (frente al 62% de participación en las elecciones de 2016), la más baja en las elecciones celebradas en las últimas cuatro décadas, lo que se puede interpretar como un signo de desafección hacia un régimen cuya legitimidad está cada día más erosionada. En Teherán, el índice de participación se desmoronó hasta el 26,2% (frente al 50% de las elecciones de 2016), ya que sólo depositó su voto uno de cada cuatro electores.

Los llamamientos a “un voto fuerte hace un Irán fuerte” fracasaron de manera rotunda. Incluso el guía supremo Ali Jamenei se vio obligado,

ante la posibilidad de un boicot masivo a las elecciones, a lanzar un discurso el 18 de febrero en el que indicó que los comicios serían “una prueba divina” y que estaba en juego “el prestigio del sistema islámico” en su conjunto. De hecho, como señala Luciano Zaccara, la campaña electoral se “centró más que nunca en esa narrativa de resistencia y oposición a la política exterior estadounidense, con unos posicionamientos menos dialogantes en relación a la comunidad internacional” para tratar de blindar el voto de los partidarios del régimen (Zaccara, 2020).

Debilidad interna y fortaleza exterior

No es necesario incidir en la importancia geoestratégica de Irán, país que, además, atesora cerca de un 10% de las reservas mundiales de hidrocarburos. Tras los atentados del 11-S en 2001, Irán fue el principal beneficiado de la ocupación estadounidense de Iraq tras la cual se instauró un sistema sectario que encumbró al poder a los partidos religiosos chiíes, situados en la órbita de Teherán. Pese a que se esperaba que la presencia militar norteamericana en Iraq debilitase a Irán, el efecto fue más bien el contrario, ya que el país persa consiguió extender su influencia gracias a una hábil política de alianzas con las facciones chiíes regionales y, además, emprendió un programa nuclear con el objeto de blindar su territorio frente a cualquier agresión externa.

Hoy en día, el Irán de los ayatolás se encuentra en una situación extremadamente paradójica, puesto que la crisis económica ha agravado el divorcio entre gobernantes y gobernados, pero Irán sigue conservando su ascendencia en Oriente Medio gracias a la estrecha alianza que mantiene con sus *proxies* o aliados regionales. Irán se ha convertido en una potencia regional que dispone de una ‘profundidad estratégica’ sin precedentes en países como Iraq, Siria, Yemen o Líbano, que conforman una suerte de arco chií que se extiende desde Teherán a Beirut pasando por Bagdad y Damasco.

Desde la intervención americana en Iraq en 2003 y, de manera más clara, tras la Primavera Árabe en 2011, Irán ha aprovechado las turbulencias regionales para afianzar su posición en Oriente Medio gracias a su apoyo tanto a gobiernos que atravesaban horas bajas, como en el caso de Iraq o Siria, como a movimientos contestarios de orientación chií como el Hezbolá libanés o los Huzi yemeníes. La Fuerza al-Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria comandada por Qasem Suleimani, ha tejido una compleja maraña de alianzas con sus *proxies* regionales, gracias a lo cual ha conseguido afianzar esta ‘profundidad estratégica’.

*Hasan Nasrallah
advirtió que si
Estados Unidos
lanza una guerra
contra Irán, no
estará sólo en la
contienda porque
el destino de la
región está ligado
a la República
Islámica*

En el caso de Iraq, Irán armó a una serie de milicias chiíes que, tras la caída de Saddam Husein, fueron ganando cuotas de poder gracias a su proximidad a los grandes partidos chiíes. Estas fuerzas paramilitares intervinieron activamente en el conflicto sectario que se desató a partir de 2005 durante la presidencia de Nuri al-Maliki. Las organizaciones Asaib Ahl al-Haq, Kataib Hezbolá y Badr mantenían una estrecha relación con Qasem Soleimani, el arquitecto de la estrategia regional iraní. La irrupción en escena del denominado Estado Islámico en 2014 propició la creación de una gran alianza de dichas facciones chiíes denominada Movilización Popular (al-Hashad al-Sha'abi) compuesta por 140.000 efectivos, que jugaron un destacado papel en la derrota del grupo yihadista y, que, tras su derrota fueron integradas en el Ejército iraquí.

En Siria, el comandante Qasem Soleimani movilizó a una suerte de brigadas internacionales chiíes integradas por 50.000 efectivos provenientes de Líbano, Iraq, Irán, Pakistán y Afganistán, cuya participación fue decisiva para mantener en el poder al presidente Bashar Al-Asad. Un detallado informe publicado por The Washington Institute for Near East Policy advertía también de la presencia en Siria de una pléyade de milicias iraquíes como las ya mencionadas Asaib Ahl al-Haq, Kataib Hizbolá y Badr, así como Liwwa Abu Fadl al-Abbas, Harakat al-Nujaba o Kataib Sayyid al-Shuhada (Smyth, 2015). Todas estas facciones eran dirigidas, armadas y financiadas por la Guardia Revolucionaria iraní y, más concretamente, por la Fuerza al-Quds dirigida por Qasem Soleimani, hasta el punto de que Riad Hijab, ex primer ministro sirio y presidente del Alto Comité Negociador, llegó a denunciar que "Siria está ocupada por el régimen iraní. La persona que dirige el país no es Bashar al-Asad, sino Qasem Soleimani" (cit. por Badrakhan 2013).

En el caso de Líbano, Irán cuenta con el respaldo de Hezbolá, un movimiento chií que ha logrado extender su influencia en el ámbito social, económico y político desde que irrumpiese en escena en la década de los ochenta y que cuenta con unas milicias armadas de, al menos, 15.000 efectivos. Hoy en día, dispone de minoría de bloqueo en el gobierno por lo que puede vetar cualquier decisión contraria a sus intereses, como el desarme de sus milicias que reclama buena parte de la clase política libanesa. Su líder Hasan Nasrallah advirtió el 17 de mayo de 2019 que "si Estados Unidos lanza una guerra contra Irán, no estará solo en la contienda, porque el destino de nuestra región está ligado al de la República Islámica".

En Yemen, Irán mantiene estrechos lazos con la milicia Ansar Allah, más conocida como el movimiento de los Huzi, una fuerza paramilitar con un sólido respaldo entre la minoría zaidí, una rama del islam chií que engloba al 30% de la población y que ha sido sistemáticamente discriminada por el poder central. Tras la caída del presidente Abdallá

Saleh, los Huzi iniciaron una fulgurante expansión territorial que les llevó a extender su autoridad desde su feudo norteño de Saada hasta la propia capital Sanaa y amenazar la costera ciudad de Adén. Tras la intervención militar saudí-yemení en 2015, la violencia se intensificó, aunque Ansar Allah ha ido recuperando buena parte del terreno perdido hasta llegar a amenazar nuevamente Adén, la capital rebelde.

A pesar de la estrategia de ‘máxima presión’ adoptada por la administración norteamericana, Irán ha logrado mantener intacta su ascendencia regional y ninguno de sus aliados locales ha perdido posiciones significativas en el tablero de Oriente Medio. En opinión de Peyman Jafari, “en lugar de reducir la influencia de Irán, la ‘máxima presión’ ha empujado a Irán a expandir su influencia. Esto es parte de la estrategia de ‘guerra asimétrica’ de Irán, que se basa en las operaciones de golpe y fuga de la Guardia Revolucionaria, y la dependencia de sus aliados en Líbano, Siria, Irak y Yemen” (Jadaliyya, 2019). En opinión del investigador iraní, “cuanto más arrinconado esté Irán, más recurrirá a esta estrategia asimétrica”, tal y como evidenciaron los ataques con drones contra las refinerías saudíes del 14 de septiembre de 2019.

Referencias bibliográficas

Badawi, Tamer (2018): “Socioeconomic Drivers of the Protests”, *Carnegie Endowment for International Peace*, 8 de enero: <https://carnegieendowment.org/sada/75185>

Badrakhan, Abdul Wahab (2013): “Raising the Ceiling: Syria’s Inside Opposition Not Ready to Give Up.” *Al Arabiyya* 22 February: <https://english.alarabiya.net/views/2013/02/22/267684.html>

Jadaliyya (2019): “Roundtable: Iran’s Domestic Politics and Political Economy”, *Jadaliyya*, 26 de noviembre: <https://www.jadaliyya.com/Details/40287>

Khamenei, Ali (2019): “A very dangerous conspiracy was quashed by the Iranian people”, 27 de noviembre: <http://english.khamenei.ir/news/7197/A-very-dangerous-conspiracy-was-quashed-by-the-iranian-people>

Smyth, Phillipe (2015): *The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effects*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.

USIP (2020): “Coronavirus Strikes Iran”, *United States Institute for Peace*, 24 de febrero de 2020: <https://iranprimer.usip.org/blog/2020/feb/24/coronavirus-strikes-iran>

Zaccara, Luciano (2020): “Análisis pre-electoral. Irán elecciones legislativas de 2020”, Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, 14 de febrero: <http://opemam.org/node/11383>